

2.21. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL A NIVEL INTERNACIONAL (pp. 1-7)

—

2.21. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A NIVELL INTERNACIONAL (pp. 8-13)

ROSA M. FERNÁNDEZ EGEA

Profesora de Derecho Internacional Público / Professora de Dret Internacional Públic

Universidad Autónoma de Madrid

Sumario: 1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). 2. Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Tal y como se advirtió en la crónica de abril del presente año, dado que no existe un tribunal o foro internacional que tenga competencia para resolver las controversias de carácter ambiental, la jurisprudencia internacional en esta materia, cuando existe, se halla diseminada entre las diversas jurisdicciones.

1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Aunque la Convención Europea de Derechos Humanos no contempla un derecho específico sobre el derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente saludable y protegido, es cierto que, al hilo de la protección de otros derechos, se puede constatar cierta salvaguarda de los intereses ambientales, cuando estos se encuentran estrechamente ligados al disfrute de los derechos fundamentales contenidos en la Convención¹.

El pronunciamiento dictado por el TEDH el 20 de mayo de 2010 (asunto *Oluic v. Croacia*, ECHR 686) es, precisamente, uno de ellos. Este supuesto hacía referencia a una familia que se quejaba de los ruidos procedentes de un bar que ocupaba una parte de la casa donde vivía. La familia tuvo que soportar un elevado nivel de ruido, sobre todo por la noche, durante ocho años, lo que ponía en peligro el descanso y la salud. Aunque se sucedieron las denuncias y las consecuentes mediciones de ruido —que confirmaron que el ruido excedía el nivel permitido—, el propietario del local no llevó a cabo las obras necesarias para mitigar la molesta contaminación acústica, ante la impasibilidad de la Administración. Durante este tiempo, los distintos miembros de la familia aquejaron diversos problemas de salud, debidamente certificados.

A la vista de estas circunstancias, y tras agotar los recursos internos, los miembros de la familia decidieron interponer un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocando la vulneración del artículo 8 de la Convención, que recoge el

¹ La jurisprudencia del TEDH se puede consultar en el sitio web del Tribunal: <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/>.

derecho al respeto de la vida privada y familiar, su hogar y su correspondencia. Aunque, ciertamente, el derecho a disfrutar de un medio ambiente sin ruidos excesivos no se recoge explícitamente en la Convención, no es la primera vez que el Tribunal ha realizado una interpretación extensiva del artículo 8 para dar cabida a esta circunstancia². En este sentido, el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas razonables para asegurar el pleno disfrute de este derecho, ponderando el interés del particular con el interés de la comunidad en su conjunto.

En el presente caso, dado el largo periodo en que la demandante estuvo expuesta a dichos ruidos nocturnos, el Tribunal consideró que la falta de actuación administrativa motivó la infracción del derecho al respeto de su hogar y su vida privada.

Un segundo asunto resuelto por el TEDH, que afecta de manera indirecta al medio ambiente, es el reciente pronunciamiento de 28 de septiembre de 2010, emitido por su Gran Sala, en el asunto *Mangouras c. España*³.

Tras el desastre ambiental del Prestige, el Sr. Mangouras, capitán del buque, fue detenido por las autoridades españolas y sometido a prisión preventiva. El juez de instrucción estableció una fianza de tres millones de euros, atendiendo a la gravedad de los hechos que se juzgaban y al hecho de que el acusado era extranjero y no contaba con vínculo alguno con España. Estas circunstancias justificaban suficientemente, según el juez de instrucción, la elevada suma de la fianza, pues, de ser menor, existía el peligro de que se fugara de España y no compareciera a juicio.

Sin embargo, en opinión del Sr. Mangouras, la cantidad era excesiva, desproporcionada y no realista, dado que no tenía en cuenta su situación personal (profesión, antecedentes, situación familiar, etc.) y financiera, lo que hacía prácticamente imposible que pudiera asumir la fianza. Por estos motivos, recurrió la imposición de la fianza en las diferentes instancias penales hasta llegar al Tribunal Constitucional en amparo, sin lograr su pretensión.

² Existen varios precedentes. El más similar al caso de autos es el asunto *Moreno Gómez c. España*, de 19 de noviembre de 2004 (ECHR 2004-X), relativo a los ruidos procedentes de bares nocturnos.

³ Asunto *Mangouras c. España*, de 28 de septiembre de 2010 (ECHR 12050/04).

Tras ochenta y tres días de prisión preventiva, la compañía de seguros del propietario del buque pagó la fianza del Sr. Mangouras en un gesto humanitario espontáneo. Así, las autoridades españolas aceptaron que Mangouras regresara a Grecia con la condición de quedar bajo la vigilancia y control de las autoridades griegas hasta que se resolviera el juicio principal, aún pendiente en España. Este hecho justificaba, en opinión de España, que la fianza no era tan desproporcionada, pues, de hecho, pudo ser pagada.

Aun así, el Sr. Mangouras demandó a España ante el TEDH por haber fijado una fianza excesiva que, a su juicio, vulneraba su derecho a la libertad y la seguridad, por contravenir el artículo 5.3 de la Convención Europea de Derechos Humanos⁴. Tras haber sido juzgado por una de las salas del TEDH⁵, el asunto fue remitido el 7 de abril de 2009 a la Gran Sala, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 de la Convención.

Por una mayoría de diez votos frente a siete, la Gran Sala confirmó el fallo de la Sala al considerar que no se había vulnerado el artículo 5.3 de la Convención, pues esta disposición no se opone a que los Estados adopten medidas para evitar que los acusados en un crimen evadan su responsabilidad, siempre que esas medidas estén debidamente justificadas. En el presente caso, se trataba de dilucidar si el hecho de que la cantidad de la fianza no se hubiera establecido teniendo en cuenta exclusivamente las circunstancias personales del imputado suponía una vulneración del derecho fundamental. En este sentido, el TEDH consideró, aludiendo a jurisprudencia anterior, que en situaciones especiales era posible considerar otras circunstancias, tales como la gravedad de los hechos que se le imputaban. El desastre ambiental provocado por el vertido de petróleo del Prestige era una de esas situaciones.

Más aún, el TEDH confirmó que los Estados contaban cada vez con más competencias y obligaciones para prevenir la contaminación marítima y que existía un interés creciente y legítimo en la jurisprudencia europea e internacional en relación con los crímenes ambientales. El Tribunal no podía obviar estas constataciones a la hora de interpretar el artículo 5.3 de la Convención. Así pues, una actividad tan peligrosa como

⁴ Esta disposición señala lo siguiente: “Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1.c del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a juicio”.

⁵ Pronunciamiento del 8 de enero de 2009.

la que conlleva el transporte marítimo del crudo, así como sus consecuencias y sus considerables implicaciones pecuniarias, eran elementos que podían y debían tenerse en cuenta a la hora de fijar la fianza.

Esta opinión, con todo, no fue compartida por siete magistrados del TEDH, que emitieron un propio voto particular conjunto, afirmando que la cantidad de la fianza era incompatible con los principios recogidos en el artículo 5 de la Convención. Entendían que, para fijar una fianza, solo se debían considerar las circunstancias personales del imputado y no otros elementos externos, como la gravedad ambiental y financiera de los hechos que se le imputaban o el que esa fianza pudiera ser pagada por una compañía de seguros. En opinión de esos magistrados, el hecho de que la cantidad fuera exorbitante hasta el punto de que parecía ilusorio que el imputado pudiera pagarla, bastaba para probar su falta de idoneidad. Además, enfatizaron que no se habían tenido en cuenta otras medidas que podrían haber asegurado la comparecencia del imputado al juicio, como las que se dieron en la práctica.

En cualquier caso, el asunto es relevante desde el punto de vista ambiental, en tanto que se han tenido en cuenta las implicaciones ecológicas a la hora de interpretar los requisitos y condicionantes de los derechos recogidos en la Convención Europea de Derechos Humanos.

2. Corte Internacional de Justicia (CIJ)

La CIJ es el único tribunal internacional con competencia para resolver cualquier controversia en materia de Derecho internacional ambiental en virtud de su jurisdicción universal, si bien han sido pocos sus pronunciamientos con implicaciones ambientales⁶. De hecho, una vez recaída sentencia en el asunto sobre las fábricas de papel en el río

⁶ Véase el asunto Proyecto Gabcikov-Nagymaros (Hungria c. Eslovaquia), de 25 de septiembre de 1997, y la opinión consultiva de la CIJ en relación con la legalidad de la amenaza o uso de las armas nucleares de 8 de julio de 1996.

Uruguay (Argentina c. Uruguay)⁷, solo quedan dos casos de tinte ambiental que deben ser resueltos por la Corte.

El primero de ellos es el asunto de las fumigaciones aéreas de pesticidas tóxicos sobre el territorio ecuatoriano (Ecuador c. Colombia), demanda interpuesta en abril de 2008 y que aún está pendiente de ser resuelta por la Corte. En este caso, Honduras sostiene que Colombia ha violado sus obligaciones de Derecho internacional por el depósito de herbicidas tóxicos (glifosato) para erradicar las plantaciones de coca (sustento de la guerrilla colombiana), lo que entraña serios daños para la salud humana, los bienes y el medio ambiente hondureños. Honduras solicita de la Corte que fije una indemnización por dichos daños y que determine que Colombia ha de abstenerse en un futuro de realizar dichas actuaciones⁸.

El segundo caso, más reciente, es fruto de la demanda interpuesta por Australia contra Japón el 31 de mayo del presente año⁹. A este asunto dedicaremos mayor atención.

La Convención Internacional para la Regulación de la Caza de las Ballenas prohíbe las capturas con fines comerciales de aquellos cetáceos que se encuentren en peligro de extinción; en su artículo VIII, no obstante, contempla la posibilidad de otorgar permisos especiales para la captura, comercio y muerte de las ballenas por motivos científicos. Amparándose en dicha excepción, algunos países siguen autorizando la captura de ballenas en un número que parece poner en cuestión que su objetivo sea la investigación científica.

Esta cuestión preocupa hasta tal punto que, en el seno de la Comisión Ballenera Internacional, se viene barajando la idea de levantar la moratoria de pesca de ballenas

⁷ El pronunciamiento de la CIJ en el asunto sobre las fábricas de papel en el río Uruguay (Argentina c. Uruguay) puede consultarse en la página de la de la propia CIJ: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=au&case=135&k=88>. Sobre este asunto, véase la crónica de jurisprudencia internacional del número anterior y la nota de Susana Borràs, publicada en el mismo número. En cumplimiento del pronunciamiento de la CIJ, el 30 de agosto de 2010 se concluyó un acuerdo entre Argentina y Uruguay por el que se establecían las directivas para la constitución y funcionamiento de un Comité Científico, creado en el seno de la Comisión Administrativa del Río Uruguay, con el fin de monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos con vertidos en él y en sus áreas de influencia.

⁸ Véase la evolución del caso en: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&code=ecol&case=138&k=ee>.

⁹ Véase la evolución del caso en: <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&code=aj&case=148&k=64&PHPSESSID=ace0908aa3a55f93dfcb40677feb464a>.

con fines comerciales y permitir su pesca por un periodo de 10 años, aunque sometida a un límite máximo de capturas. Así, aunque se permitieran las capturas, estas estarían más controladas y limitadas, a diferencia de lo que sucede hoy día en la práctica. No obstante, ante la falta de consenso, la Comisión decidió aplazar esta decisión para su siguiente reunión anual, que tendrá lugar en 2011.

Japón es uno de los países más activos en la pesca de la ballena y otorga cobertura jurídica a sus buques a través del Programa Japonés de Investigación Ballenera en la Antártica (JARPA), que se encuentra ya en su segunda fase de desarrollo. Sin embargo, a juicio de Australia, el desarrollo del Plan JARPA supone una violación de las obligaciones internacionales de Japón en relación con la pesca de ballenas y la preservación de los mamíferos marinos y su medio ambiente. En concreto, Australia denuncia que las actividades pesqueras japonesas contravienen las siguientes disposiciones del Anexo al Convenio Internacional para la Regulación de la Caza de las Ballenas:

- Artículo 10 (e), por el cual las partes se comprometen de buena fe a no capturar ni matar ballenas con fines comerciales. Aunque en un primer momento Japón había presentado objeciones a esta cláusula, estas fueron retiradas posteriormente para determinados tipos de ballenas, de modo sí se halla vinculado por dicha obligación.
- Artículo 7 (b), mediante el cual las partes se comprometen de buena fe a abstenerse de la captura comercial de un determinado tipo de ballenas en la región denominada “Santuario del océano meridional”. Japón también presentó en su día una objeción a dicha cláusula, si bien referida a la población de rorcual menor del Antártico.

Australia sostiene que Japón no ha demostrado el interés científico de estas capturas ni que estas redunden en la conservación y gestión de los bancos de ballenas, pese a que la especie se halla en peligro de extinción. En consecuencia, entiende que la regulación japonesa no se puede amparar en las excepciones previstas al efecto en la Convención.

Además, según Australia, la actividad pesquera japonesa contraviene otras obligaciones internacionales recogidas en instrumentos como el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) y la Convención sobre Diversidad Biológica.

Por todo ello, Australia solicita de la Corte el cese de la aplicación del Programa JARPA-II, así como que se revoque toda autorización o permiso que autorice las actividades ilícitas y que se aporten las garantías necesarias que permitan afirmar que no se adoptarán futuras acciones sobre la base del Programa JARPA-II u otro programa similar hasta que estos sean conformes al Derecho internacional.

Quedaremos a la espera del pronunciamiento de la CIJ en este asunto, para ver si su fallo puede poner fin a la captura abusiva de ballenas por parte de Japón y de otros países, como Islandia o Noruega, entre otros.

Sumari: 1. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). 2. La Cort Internacional de Justícia (CIJ).

Tal com vam advertir en la crònica d'abril d'aquest any, atès que no hi ha cap tribunal o fòrum internacional que tingui competència per resoldre controvèrsies de caràcter ambiental, la jurisprudència internacional en aquesta matèria, si n'hi ha, es troba disseminada entre les diverses jurisdiccions.

1. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)

Tot i que la Convenció europea de drets humans no preveu cap dret específic sobre el dret de les persones a gaudir d'un medi ambient saludable i protegit, és cert que al fil de la protecció d'altres drets s'ha pogut afirmar una certa salvaguarda dels interessos ambientals, quan aquests es troben estretament units al gaudi dels drets fonamentals que conté la Convenció¹.

El pronunciament dictat pel TEDH el 20 de maig de 2010, afer *Oluic v. Croàcia*², precisament, n'és un.

En el supòsit esmentat es tractava una família que es queixava de sorolls procedents del bar que ocupava una part de casa seva. La família va haver de suportar un nivell determinat de soroll, sobretot durant les nits, durant un període de vuit anys, que posava en perill el descans i la salut. Malgrat que es van succeir les denúncies i els consegüents mesuraments de soroll, que confirmaven que el soroll s'excedia en el nivell permès, el propietari del local no va dur a terme les obres necessàries per mitigar la molesta contaminació acústica, davant la impassibilitat de l'Administració. Durant aquest temps, els membres de la família van patir diversos problemes de salut, que es van certificar degudament.

¹ La jurisprudència del TEDH es pot consultar a la pàgina web del Tribunal: <http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/>.

² Afer *Oluic c. Croàcia*, de 20 de maig de 2010 (ECHR 686).

A la vista d'aquestes circumstàncies, i després d'haver exhaurit els recursos interns, els membres de la família van decidir interposar un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans en què invocaven la vulneració de l'article 8 de la Convenció, que recull el dret al respecte de la vida privada i familiar, de la llar i de la correspondència. Encara que, certament, el dret a gaudir del medi ambient sense sorolls excessius no es troba explícitament recollit en la Convenció, no és la primera vegada que el Tribunal realitza una interpretació extensiva de l'article 8 de la Convenció per incloure aquesta circumstància³. En aquest sentit, l'Estat té l'obligació d'adoptar totes les mesures raonables per assegurar el ple gaudi d'aquest dret, i ponderar l'interès de la persona particular amb l'interès de la comunitat en conjunt.

En aquest cas, atès el llarg període de temps en què la part demandant va estar exposada a sorolls nocturns més intensos dels permesos, el Tribunal va considerar que la falta d'actuació administrativa havia motivat la infracció del dret a respectar la seva llar i la seva vida privada.

El segon afer que ha resolt el TEDH i que afecta de manera indirecta el medi ambient, és el recent pronunciament de 28 de setembre de 2010, emès per la Gran Sala, en l'afer *Mangouras c. Espanya*⁴.

Després del desastre ambiental del Prestige, el Sr. Mangouras, capità del vaixell, va ser detingut per les autoritats espanyoles i sotmès a presó preventiva. El jutge d'instrucció va establir una fiança de tres milions d'euros, atenent la gravetat dels fets que es jutjaven i el fet que l'acusat era estranger i no tenia cap vincle amb Espanya. Aquestes circumstàncies justificaven suficientment, segons el jutge d'instrucció, la gran suma de la fiança perquè, si hagués estat menor, hauria existit el perill que s'escapés d'Espanya i no comparegués a judici.

No obstant això, segons el Sr. Mangouras, la quantitat era excessiva, desproporcionada i no gens realista, ja que no tenia en compte la seva situació personal (professió,

³ Existeixen diversos precedents i el més semblant al cas d'actuacions és l'afer *Moreno Gómez c. Espanya*, de 19 de novembre de 2004 (ECHR 2004-X), relatiu als sorolls procedents de bars nocturns.

⁴ Afer *Mangouras c. Espanya*, de 28 de setembre de 2010 (ECHR 12050/04).

antecedents, situació familiar, etc.) ni financera, la qual cosa feia pràcticament impossible que pogués assumir la fiança. Per aquests motius, va recórrer la imposició de la fiança en les diferents instàncies penals fins a arribar al Tribunal Constitucional en empara, sense aconseguir la seva pretensió.

Després de 83 dies de presó preventiva, la companyia d'assegurances del propietari del vaixell va pagar la fiança del Sr. Mangouras en un gest humanitari espontani. Així, les autoritats espanyoles van acceptar que Mangouras tornés a Grècia amb la condició que quedés sota vigilància i control de les autoritats gregues fins que es resolgués el judici principal que encara estava pendent a Espanya. Aquest fet justificava, segons l'opinió d'Espanya, que la fiança no era tan desproporcionada si, de fet, s'havia pogut pagar.

Tot i així, el Sr. Mangouras va demandar Espanya a demanda davant el TEDH per haver fixat una fiança excessiva, que, al seu parer, vulnerava el dret a la llibertat i a la seguretat per haver contravingut l'article 5.3 de la Convenció europea de drets humans⁵. Després d'haver estat jutjat per una de les sales del TEDH⁶, l'afer va ser remès el 7 d'abril de 2009 a la Gran Sala, en aplicació del que disposa l'article 43 de la Convenció.

Per una majoria de deu vots enfront de set, la Gran Sala va confirmar la resolució de la Sala en considerar que no s'havia vulnerat l'art. 5.3 de la Convenció, ja que aquesta disposició no s'oposa que els estats adoptin mesures per evitar que els acusats en un crim n'evadeixin la responsabilitat, sempre que aquestes estiguin convenientment justificades. En aquest cas, es tractava de dilucidar si el fet que la quantitat de la fiança no hagués estat establerta tenint en compte exclusivament les circumstàncies personals de l'imputat suposava cap vulneració del dret fonamental. En aquest sentit, el TEDH va considerar, al·ludint a jurisprudència anterior, que en situacions especials era possible considerar altres circumstàncies tals com la gravetat dels fets que se li imputaven. El desastre ambiental provocat pel vessament de petroli del Prestige justificava una situació així d'especial.

⁵ Aquesta disposició diu: "*Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones previstas en el párrafo 1.c. del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado a juicio*".

⁶ Pronunciament del 8 de gener de 2009.

Més encara, el TEDH va confirmar que els estats cada cop comptaven amb més competències i obligacions per prevenir la contaminació marítima i que hi havia un interès creixent i legítim en la jurisprudència europea i internacional en relació amb els crims ambientals. El Tribunal no podia obviar aquestes constatacions a l'hora d'interpretar l'article 5.3 de la Convenció. Així, doncs, una activitat tan perillosa com la que comporta el transport marítim del cru, i les conseqüències i les seves considerables implicacions pecuniàries, eren elements que podien i havien de tenir-se en compte a l'hora de fixar la fiança.

No obstant això, set magistrats del TEDH no van compartir aquesta opinió, que van emetre un vot propi particular conjunt, en què afirmaven que la quantitat de la fiança era incompatible amb els principis que recollia l'article 5 de la Convenció. Això perquè entenen que les circumstàncies personals de l'imputat són només les que han de considerar-se per fixar una fiança i no s'han de tenir en compte altres elements externs com la gravetat ambiental i financera dels fets que se li imputaven o que finalment la pogués pagar la companyia d'assegurances. El fet que la quantitat fos exorbitant fins al punt que semblava il·lusori que l'imputat pogués pagar-la era prou per provar la manca d'idoneïtat. A més a més, van emfatitzar que no s'havien tingut en compte altres mesures que podrien haver assegurat la compareixença de la persona imputada al judici, tals com les que posteriorment van ocórrer en la pràctica.

En tot cas, aquest afer és rellevant des del punt de vista ambiental, ja que s'han tingut en compte les implicacions ecològiques a l'hora d'interpretar els requisits i els condicionants dels drets que recull la Convenció europea de drets humans.

2. La Cort Internacional de Justícia (CIJ)

La CIJ és l'únic tribunal internacional que té competència per resoldre qualsevol controvèrsia en matèria de dret internacional ambiental en virtut a la seva jurisdicció universal, si bé els pronunciaments de la Cort amb implicacions ambientals han estat

pocs⁷. De fet, un cop ha recaigut sentència en l'afer sobre les fàbriques de paper al riu Uruguai (l'Argentina c. l'Uruguai)⁸, ja només queden pendents dos casos de caràcter ambiental que ha de resoldre la Cort.

El primer és l'afer de les fumigacions aèries de pesticides tòxics al territori equatorià (l'Equador c. Colòmbia), demanda interposada a l'abril de 2008 i que la Cort encara no ha resolt. En aquest cas, Hondures sosté que Colòmbia ha violat les seves obligacions de dret internacional pel dipòsit d'herbicides tòxics (glifosat) per eradicar plantacions de coca (sustentacle de la guerrilla colombiana), cosa que ha comportat seriosos danys a la salut humana, als béns i al medi ambient hondurenys. Hondures sol·licita a la Cort que fixi una indemnització pels danys esmentats i que determini que Colòmbia s'abstingui en un futur de realitzar aquestes actuacions⁹.

El segon cas és més recent, ja que s'ha originat fruit de la demanda interposada per Austràlia contra el Japó el passat 31 de maig¹⁰. A aquest afer hi dedicarem més atenció.

La Convenció internacional per a la regulació de la caça de les balenes prohibeix les captures amb fins comercials dels cetacis que es trobin en perill d'extinció, i l'article VIII permet la possibilitat d'atorgar permisos especials per a la captura, el comerç i la mort de les balenes per motius científics. Emparant-se en aquesta excepció, alguns països continuen autoritzant la captura de balenes en un nombre que fa sospitar que tingui com a objectiu la investigació científica.

⁷ Vegeu l'afer Projecte Gabcikov-Nagymaros (Hongria c. Eslovàquia) de 25 de setembre de 1997 i l'opinió consultiva de la CIJ en relació amb la legalitat de l'amenaça o l'ús de les armes nuclears de 8 de juliol de 1996.

⁸ El pronunciament de la CIJ en l'afer sobre les fàbriques de paper al riu Uruguai (l'Argentina c. l'Uruguai) es pot consultar a la pàgina de la CIJ: <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=au&case=135&k=88>>. Sobre aquest afer, vegeu la crònica de jurisprudència internacional del núm.1 de la RCDA i la nota de Susana Borràs, publicada al mateix número. En compliment del pronunciament de la CIJ, el 30 d'agost de 2010 s'ha tancat un acord entre l'Argentina i l'Uruguai que estableix les directives per a la constitució i el funcionament d'un comitè científic, creat al si de la Comissió Administrativa del Riu Uruguai, per supervisar el riu Uruguai i tots els establiments industrials, agrícoles i centres urbans amb abocaments al riu Uruguai i a les seves àrees d'influència.

⁹ Vegeu l'evolució del cas a: <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&code=ecol&case=138&k=ee>>.

¹⁰ Vegeu l'evolució del cas a: <<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&code=aj&case=148&k=64&PHPSESSID=ace0908aa3a55f93dfcb40677feb464a>>.

Aquesta qüestió preocupa fins al punt que al si de la Comissió Balenera Internacional s'especula sobre la idea d'aixecar la moratòria de pesca de balenes amb fins comercials, i permetre'n la pesca durant un període de deu anys encara que estigui sotmesa a un límit màxim de captures. Així, encara que es permetin les captures, aquestes es controlarien més i es trobarien més limitades del que succeeix avui dia en la pràctica. No obstant això, davant la falta de consens, es va decidir ajornar la decisió fins a la següent reunió anual el 2011.

El Japó és un dels països més actius pel que fa a la pesca de balena i atorga cobertura jurídica als vaixells a través del Programa Japonès d'Investigació Balenera a l'Antàrtica (JARPA), ja en la seva segona fase de desplegament. No obstant això, segons el parer d'Austràlia, el desplegament del Pla JARPA suposa violar les obligacions internacionals del Japó en relació amb la pesca de balenes i la preservació dels mamífers marins i el seu medi ambient. En concret, Austràlia denuncia que les activitats pesqueres japoneses es realitzen en contravenció de les disposicions següents de l'annex al Conveni internacional per a la regulació de la pesca de la balena:

- Article 10 (e), pel qual les parts es comprometen de bona fe a no capturar ni matar balenes amb fins comercials. Malgrat que en un primer moment el Japó havia presentat objeccions a aquesta clàusula, aquestes es van retirar posteriorment per a determinats tipus de balenes, amb la qual cosa sí que es troba vinculat per aquesta obligació.

- Article 7 (b), mitjançant el qual, les parts es comprometen de bona fe a abstenir-se de la captura comercial d'un determinat tipus de balenes a la regió denominada "Santuari de l'oceà meridional". El Japó també va presentar al seu dia una objecció a clàusula esmentada, si bé, referida a la població de rorqual menor de l'Antàrtic.

Austràlia sosté que el Japó no ha demostrat l'interès científic d'aquestes captures ni que aquestes redundin en la conservació i en la gestió dels bancs de balenes, espècie que es troba en perill d'extinció. Per tot això, la regulació japonesa no pot emparar-se en les excepcions que preveu a l'efecte la Convenció.

A més a més, segons Austràlia, l'activitat pesquera japonesa contravé altres obligacions internacionals recollides en instruments com el Conveni internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestre (CITIS) i la Convenció sobre diversitat biològica.

Per tot això, Austràlia sol·licita a la Cort que cessi l'aplicació del Programa JARPA-II, que es revoquin totes les llicències o permisos que autoritzin activitats il·lícites i que s'aportin les garanties necessàries que permetin afirmar que no s'adoptaran futures accions sobre la base del Programa JARPA-II o d'un altre programa similar fins que aquests siguin conformes al dret internacional. Esperarem el pronunciament de la CIJ pel que fa a aquest afer i si la Cort Internacional de Justícia amb la seva resolució pot posar fi a la captura abusiva de balenes per part del Japó i d'altres països, com ara Islàndia o Noruega, entre altres.